

6652

EXPORTE No.

Forma A, No. 17 B

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

2a. OFICIALIA MAYOR

DIRECTO,

Año de iniciación 1935

Núm. 6652

Toca al Amparo DIRECTO.

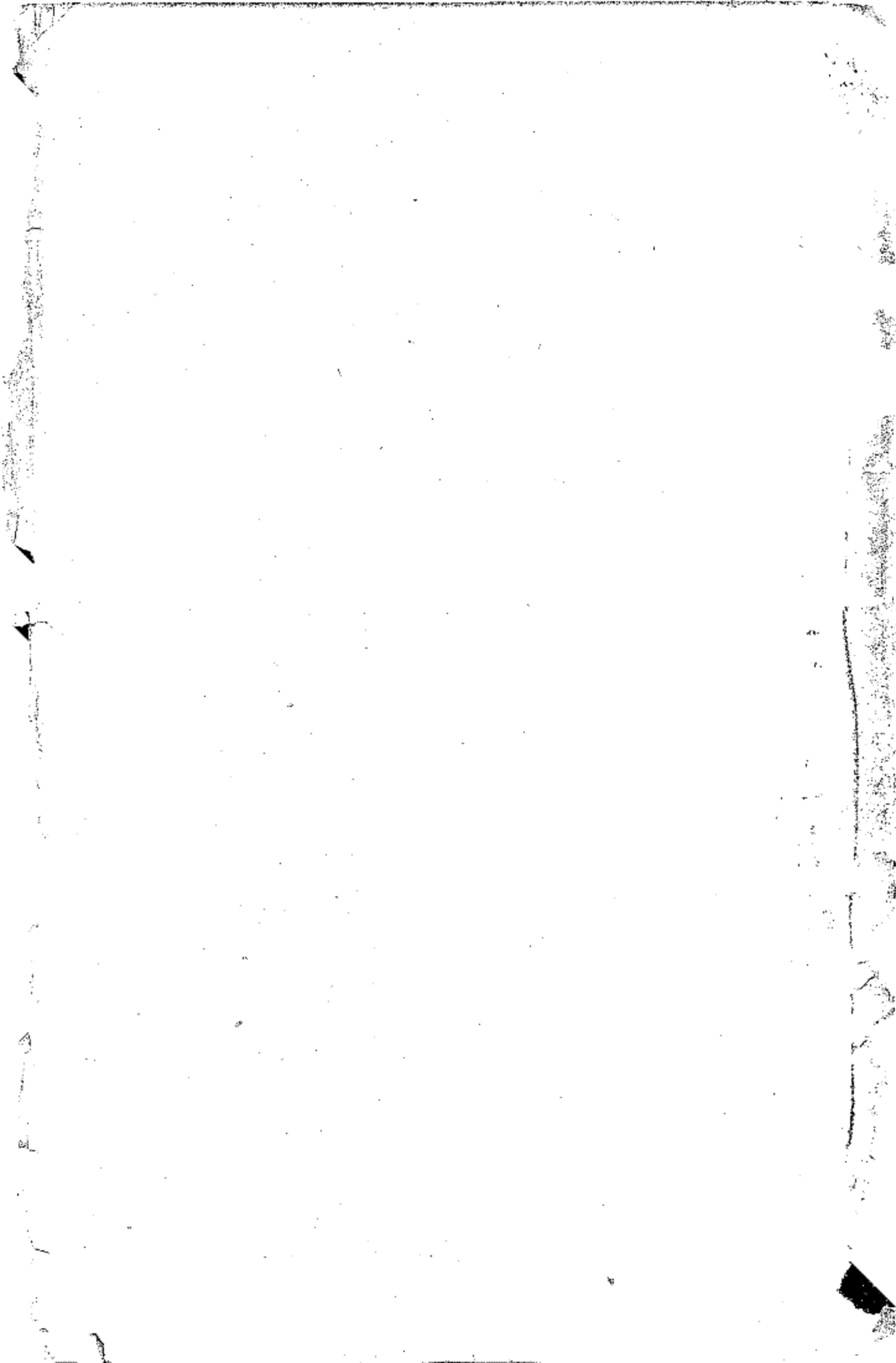
Promovido por Cuéllar Rómulo Sucn.

Contra actos de 1a. Sala del Trib. Sup. de Just. del Edo.

Ante el Juez de Distrito de

Fecha de ingreso al archivo







México, Distrito Federal, a once__
de mayo de mil novecientos treinta y ocho. ACUERDO__
DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA --
DE LA NACION.

VISTOS los autos del juicio de am-
paro interpuesto directamente ante esta Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación por Francisco Zárate, --
en representación de la sucesión de Rómulo Cuéllar, --
contra actos de la Primera Sala del Tribunal Supe- --
rior de Justicia del Estado de Tamaulipas, por vio- --
lación de los artículos 14 C 16 de la Constitución -
Federal; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO:- La sucesión de Rómulo --
Cuéllar, representada por su albacea señor Francisco
Zárate, reclama la sentencia definitiva pronunciada_
por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justi- --
cia del Estado de Tamaulipas, el dieciocho de octu- --
bre de mil novecientos treinta y cinco, en el inter-
dicto de obra nueva promovido por la citada sucesión
contra los señores Santiago y Marcial Luna, resolu- --
ción que revocando la del inferior absuelve a la par-
te demandada, y declara que no ha lugar a ordenar --
la demolición de la obra, dejando a salvo al actor --
sus derechos para proponer la demanda de propiedad --
o de posesión en el juicio correspondiente, sin hacer
especial condenación en costas. Manifiesta la quejo-
sa en su demanda: que ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Matamoros, Tamaulipas, promovió un interdic-
to de obra nueva, contra los señores Santiago y Mar-
cial Luna, quienes invadiendo posesiones de la ex- --

-presada sucesión, comenzaron a contruir una cerca -
en terrenos de su propiedad situados en la jurisdic-
ción de San Fernando; que seguido el juicio por to--
dos sus trámites, el Juez de Primera Instancia pro--
nunció sentencia declarando procedente la acción, --
contra cuya resolución los demandados interpusieron
el recurso de apelación que se admitió en el efecto
devolutivo; que en la alzada promovió un incidente -
de nulidad de notificaciones en virtud de no haber -
sido citada la quejosa para la vista respectiva, in-
cidente que fue resuelto en contra de las pretensio-
nes del actor incidental; que tampoco se la citó para
oír sentencia, dejándola sin oportunidad para
presentar sus alegatos; y por último, se pronunció
la sentencia que motiva este juicio de amparo en
términos que antes se dejaron expresados. Cita
quejoso como garantías violadas las consignadas en -
los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; y
a continuación expresó los conceptos de violación --
que estimó pertinentes, de los que se hará referencia
en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO:- Admitida la demanda, em-
plazada la parte tercero perjudicada, y una vez que
la autoridad responsable rindió su informe justifica-
do con el que remitió las constancias designadas por
las partes, se pasaron los autos al Ministerio Pú-
blico Federal, y el señor Agente designado para in-
tervenir en el asunto, formuló su pedimento en el --
sentido de que se niegue a la sucesión quejosa la --
protección federal que solicita; y,

####

112



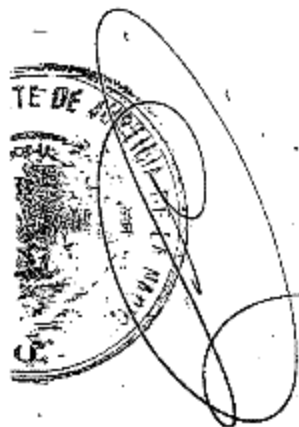
C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO:- La existencia de la resolución que motiva este juicio de garantías ha quedado plenamente acreditada para los efectos del mismo, -- con la copia certificada de dicha resolución que -- obra inserta entre las constancias que integran la copia certificada remitida por la autoridad responsable.

SEGUNDO:- Dicha sentencia substancialmente se funda en lo siguiente: que los elementos de la acción de interdicto de obra nueva, son: -- I.- que el actor sea propietario de un inmueble; II. que el demandado esté construyendo una obra nueva -- o que no haya pasado un año desde que se terminó la construcción; III. que la obra perjudique la propiedad del actor. Afirma la sentencia, que atendo lo anterior, de las pruebas rendidas; resulta lo siguiente: que con las escrituras cuarenta y ciento veintinueve, se acredita plenamente que la sucesión del General Rómulo Cuéllar, es propietaria de los terrenos a que se refieren dichas escrituras; que también que dó acreditado plenamente con la inspección judicial, con la manifestación hecha por los demandados, y -- con la confesional ofrecida por el actor, que los señores Luna empezaron a construir una cerca, obra ésta, que está señalada por el actor como la obra nueva materia del interdicto; que para el efecto de determinar si la cerca de referencia causa perjuicios a la propiedad del actor, debe tenerse en cuenta, que éste manifiesta que la cerca en cuestión -- atraviesa los terrenos de su propiedad y posesión, --



con lo que se trata de privarlo de una y otra cosa -
sin derecho; que para determinar si dicha cerca que
están construyendo los señores Luna atraviesa las
propiedades del señor General Cuéllar, de las prue-
bas rendidas resulta lo siguiente: que el terreno a
que se refiere la demanda está identificado con el
dicho de los testigos, cuya testimonial hace prueba
plena en lo que se refiere a su localización, mas
no en cuanto al derecho de propiedad sobre dicho te-
rreno, porque la propiedad de un bien inmueble debe
acreditarse en la forma documental que establece la
ley; por tanto, la testimonial sólo acredita la exis-
tencia de la obra y a los nombres con que se deno-
man los terrenos colindantes de aquel en que se con-
struye, pero no la propiedad de dichos terrenos
de aquel en donde se construye la cerca, y como los
títulos de propiedad exhibidos no contienen datos su-
ficientes para identificar como el mismo, el terreno
a que se refiere la parte actora en su demanda y
aquel en que se construye la cerca mencionada, pues
una escritura no contiene datos para precisar la si-
tuación de la propiedad que ampara y la otra contie-
ne datos que no concuerdan con los que proporciona
el actor en su demanda y lo expresado por los testi-
gos, y como por otra parte, tampoco existen datos pa-
ra afirmar que los nombres expresados en la demanda
y por los testigos, se refieran a los mismos terre-
nos que con nombres distintos se citan en la escritu-
ra ciento veintinueve, se concluye, que la sucesión
del señor General Rómulo Cuéllar, es propietaria de



los terrenos que se mencionan en las escrituras ---
 cuarenta y ciento veintinueve que exhibió el actor, -
 que no identifican como los mismos aquel en que se -
 construye la cerca, y que relacionándolas con las --
 exhibidas por los demandados, resulta que las diver-
 sas propiedades que amparan dichas escrituras provie-
 nen de una sólo propiedad que por compra adquirió la
 señora Exiquia Canales de Cuéllan, y según las mis-
 mas escrituras dicha propiedad se dividió en tres --
 partes, sin que aparezca ningún dato que demuestre -
 que cada una de esas partes haya sido deslindada ni
 que cada uno de los herederos haya tomado posesión -
 de ellas en lo personal, razón por la que se ignora
 cuál sea en concreto la parte de la propiedad primi-
 tiva u originaria, amparada por cada título, pues ca-
 da uno de dichos títulos solamente expresa la exten-
 sión pero no precisa la localización; que está igual-
 mente demostrado que los señores Luna han principia-
 do a construir una cerca; pero no habiéndose justifi-
 cado que los terrenos que amparan las escrituras exhi-
 bidas por el actor sean los mismos en que se empezó
 o se trata de construir la cerca de referencia, no -
 se ha probado que la obra mencionada pase o atravie-
 se terrenos de la sucesión actora; consecuentemente,
 tampoco está acreditado que dicha obra le cause al-
 gún perjuicio. Concluye revocando la sentencia del
 inferior, porque estima que el actor no probó su -
 acción, absuelve al demandado; no hace condenación -
 en costas, y deja a salvo los derechos del actor --
 para ejercitarlos en el juicio correspondiente.

TERCERO:- La sucesión quejosa expresa eontra dicha sentencia, en substancia, los siguientes conceptos de violación: I. infracción del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque no se le citó para la vista de segunda instancia, en la forma prevenida por dicha disposición legal, no obstante haberse dejado de actuar por más de dos meses en el juicio; que consecuente-mente tal infracción la dejó sin defensa, porque se le privó del derecho de asistir a la audiencia de alegatos, y la sentencia se dictó por sorpresa, violándose en consecuencia, en su perjuicio, el artículo 14 de la Constitución Federal; II. infracción del artículo 1202 del mismo Código, al estimar la sentencia que los testigos no pueden deponer sobre bienes de propiedad ni acreditarla, pues que la propiedad de bienes inmuebles debe constar en documentos o títulos que según nuestra ley civil sirven de prueba; que tal afirmación agravia a la sucesión quejosa porque desnaturaliza el espíritu de la disposición legal citada, la cual no sólo presupone documentos incompletos sino aun admite la posibilidad de su falta absoluta, concediendo en defecto de éstos prueba por testigos; III. infracción del artículo 1195, fracción I, del propio Código Procesal, porque no obstante que el requisito "perjuicio a la propiedad" a que se refiere dicha disposición legal, quedó acreditado con la declaración de los testigos que tendió a obtener la suspensión provisional de la obra, y con el testimonio de los que depusieron en el curso del juicio, y con el de los que también declararon en la diligencia de inspección judicial, --





la sentencia considera que no sólo se requiere acreditar el elemento perjuicio, sino el de la propiedad misma, resultando en consecuencia inexactamente aplicado el citado precepto legal, desde el momento en que el artículo 1138 del mismo Cuerpo de Leyes, prohíbe terminantemente la admisión de pruebas sobre la propiedad, pues que, si en algunas ocasiones ésta se acredita, no es más que para relacionarla con la posesión; y como en concepto del quejoso este elemento quedó plenamente acreditado de allí debe derivarse la presunción de propiedad, y al no estimarlo así la sentencia reclamada, le ocasiona el consiguiente agravio; IV. inaplicación del artículo 1134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque no obstante que los interdictos no preocupan las cuestiones de propiedad y posesión definitivas, la sentencia exige no sólo prueba de la propiedad, sino que requiere que ésta sea documental, precisa y detallada; V.- inaplicación del artículo 1138 del precitado Código de Procedimientos Civiles cuya infracción se realiza al exigir prueba sobre la propiedad basándose en una inexacta interpretación del artículo 1195, cuyo texto sólo se refiere a una situación meramente subjetiva, y que no puede estar en contradicción con lo que dispone el artículo 1138 antes mencionado; VI. inaplicación del artículo 828 del Código Civil que establece que la posesión produce la presunción de propiedad para todos los efectos legales, disposición que se ha dejado de tomar en cuenta en la especie, porque con las informaciones testimoniales se acreditó plenamente la posesión de

la sucesión quejosa, sobre el terreno en que se está contruyendo la obra, por lo cual, aun en el supuesto de que fuese necesario acreditar la propiedad, ésta debe derivarse de la presunción resultante de la posesión ; VII. infracción de los artículo 551 y 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el primero, que se refiere al pleno valor probatorio de los instrumentos públicos, cuya infracción se realiza al dejar de conceder dicho valor probatorio a los documentos con que, sin necesidad, se acreditó la propiedad del terreno a que se refiere el interdicto; y la del segundo, que se refiere al pleno valor probatorio de las actuaciones judiciales, se realiza cuando la sentencia deja de tomar en cuenta las circunstancias acreditadas en la inspección judicial practicada sobre el terreno, en la que se dio fe de la existencia de la obra, y en la que declararon los testigos de identidad. Concluye manifestando que por los conceptos antes invocados, la sentencia resulta infractora de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

CUARTO:-- El primer concepto de violación se refiere a una infracción de carácter procesal, consistente en que no se citó a la parte quejosa para la vista de segunda instancia, en los términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por medio de notificación personal, no obstante haberse dejado de actuar por más de dos meses. Este concepto de violación resulta notoriamente inconducente, porque de autos consta que



en relación a dicha infracción la quejosa promovió -
un incidente de nulidad que fué resuelto en los tér-
minos de la interlocutoria de fecha tres de diciembre
de mil novecientos treinta y cinco que declaró im-
procedente la nulidad de actuaciones por haberse he-
cho legalmente la notificación correspondiente tanto
del auto relativo de radicación como del auto citan-
do para la vista en el toca de apelación, y como es-
ta interlocutoria no ha sido reclamada en el presen-
te juicio de garantías ni tampoco se formuló en su -
contra la protesta constitucional respectiva para -
preparar el amparo en su contra, resulta inepto el -
concepto de violación aducido. Por otra parte, la -
violación no aparece acreditada ni en lo que se re-
fiere al auto de dos de julio de mil novecientos -
treinta y cinco por el que se citó para la primera -
vista ni en lo que ve al auto de quince de octubre -
siguiente que citó nuevamente para dicha audiencia,
porque respecto al primer proveído, cuya notifica-
ción fué examinada en la interlocutoria de nulidad -
de actuaciones, se demostró plenamente que no se ha-
bía dejado de actuar por más de dos meses en el to-
ca, y porque respecto al segundo, las constancias -
de autos informan igualmente que no se dejó de ac-
tuar en dicho término y que la notificación relativa
surtió sus efectos oportunamente.

QUINTO:- En cuanto a la infracción
de los artículos 1202, 1195, fracción I, 1134 y 1138
del Código de Procedimientos Civiles a que se con-
traen los conceptos de violación señalados bajo los

incisos II a V inclusive, sí deben estimarse fundados y aptos para conceder la protección federal a la sucesión quejosa, por las siguientes consideraciones: la sentencia reclamada afirma, que para que pueda prosperar la acción de interdicto de obra nueva, debe acreditarse entre otros elementos, que la obra materia del interdicto perjudica la propiedad del actor, y por ende debe demostrar que es propietario del inmueble afectado; que en la especie, la sucesión quejosa no acreditó ser propietaria de los terrenos a que se refiere en su demanda y en los que se está construyendo la cerca de postes que motivó el interdicto; por consiguiente, que no justificó que dicha cerca le irroque perjuicio alguno en sus propiedades, pues los testimonios de escritura pública que exhibió para acreditar el extremo aludido, si bien produjeron fé en lo que concierne a la propiedad de unas extensiones de terreno inscritas a nombre de la sucesión quejosa, ubicadas en la Municipalidad de San Fernando, tales extensiones de terreno no identifican la que el actor menciona en su demanda como de su propiedad, en la que se construye la obra que dió lugar al interdicto; que la información testimonial rendida, no es hábil para justificar la propiedad, porque ésta debe probarse por los medios documentales que establece la ley; que si bien los testigos identifican el terreno en que se construye la obra, como el mismo a que la parte actora se refiere en su demanda, y prueban además que en dicho terreno se está construyendo la cerca mencionada, tal información no es



apta para acreditar los extremos de la acción, en --
 tanto no se demuestre que el referido terreno es de --
 la propiedad de la actora, y que dicha construcción --
 le irroga perjuicio en esas propiedades y posesiones. --
 Tales conclusiones de la sentencia las impugna la su --
 cesión quejosa manifestando concretamente, que para --
 la procedencia del interdicto de obra nueva no es --
 indispensable acreditar la propiedad del inmueble --
 afectado, sino únicamente la posesión, elemento que --
 en su concepto quedó plenamente justificado con la --
 referida información testimonial rendida en el jui --
 cio, con la previa, con la recibida en la inspección --
 judicial, y con la propia inspección judicial. La --
 sentencia reclama al precisar cuáles son los ele --
 mentos de la acción de interdicto de obra nueva, posi --
 blemente se guió por el texto expreso de lo que dis --
 pone los artículos 1195, fracción I, 1141 y 1142 --
 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pero --
 particularmente por el primero que dispone, que el --
 interdicto de obra nueva puede entablarse cuando al --
 guno se crea "perjudicado en sus propiedades" con --
 una obra nueva que se esté construyendo, y tiene por --
 objeto entonces, impedir la continuación de ella y --
 obtener en su caso la demolición; el segundo, que --
 también establece, que no puede usar del interdicto --
 de obra nueva el que posee la cosa con título preca --
 rio; y el último, que para los efectos del artículo --
 anterior, se llama precario cualquier título que sin --
 ser traslativo de dominio, sólo confiere la simple --
 tenencia o posesión natural de la cosa en nombre de --



S

otro. Ahora bien, para fijar con precisión el alcance jurídico de esas disposiciones legales y su recta interpretación, así como la verdadera naturaleza del interdicto de obra nueva, a fin de determinar si el elemento esencial de dicho interdicto es la propiedad o la posesión del inmueble afectado, toda vez que esos preceptos pueden dar lugar a confusión, particularmente al emplear el artículo 1195 el término "perjudicado en sus propiedades", es conveniente hacer un examen retrospectivo de carácter histórico jurídico de este interdicto, examinar lo que al particular sostienen la generalidad de los autores, y por último, concordar las mencionadas disposiciones legales con las otras adjetivas de la misma quejosa cita en su demanda de amparo como inaplicables, y con algunas relativas del Código Civil de mil ochocientos ochenta y cuatro, que es el aplicable en la especie, por estar adoptado por el Estado de Tamaulipas. La generalidad de los autores modernos que tratan la cuestión, convienen en que el elemento esencial de todo interdicto es la posesión, teniendo por objeto retener, recobrar o adquirir la posesión interina de una cosa, o suspender la ejecución de una obra nueva, o que se tomen las medidas necesarias respecto de la que amenaza peligro para evitar un daño, pero siempre bajo el concepto de la posesión del bien afectado, y sin que la sentencia que en él se pronuncie decida de manera definitiva cuestiones de propiedad o posesión, que se dejan para el juicio plenario correspondiente; que el inter-



-dicto es una verdadera acción real, proveniente de un derecho en la cosa, es decir, del derecho de posesión que, posiendo él mismo sino una presunción de propiedad, no puede tener otro carácter que la misma propiedad; que el interdicto se caracteriza como acción real porque se da contra cualquiera persona que usurpa o detenta la cosa, independientemente de otra idea de obligación preexistente; que el interdicto defiende de la reivindicación en que en aquél se concluye solamente por mantenerse la posesión, sin prejuzgar nada sobre el fondo y derecho, en tanto que el demandante de reivindicación, concluye por ser declarado propietario, cuestión que hace juzgar aún -- contra el que con anterioridad había ganado la cosa en lo posesorio. (Belime). Al igual que los demás interdictos, el de obra nueva adquirió los caracteres de una acción posesoria, según la opinión de los autores modernos, por un error que se remonta a la época de los glosadores del Derecho Romano, que establecieron una doctrina enteramente falsa sobre la distinción de las tres especies de denuncia de obra nueva, del cual se hablará más adelante; pues según el Derecho Romano, la denuncia de obra nueva no era un interdicto posesorio, ni siquiera una acción, sino una oposición provisoria, que debía justificarse después en el juicio respectivo, y que lejos de servir al denunciante para hacer valer su posesión, le atribuía todas las ventajas de ella al dueño de la obra denunciada. El Derecho Romano permitía en ciertos casos, que aquel a quien podía causar perjuicio

Suprema Corte de Justicia de la Nación
México, D. F.

S

E

INTERDICTO

MA

5

la obra emprendida por otro, suspendiera su ejecución, mediante una oposición interpuesta en una forma solemne la cual se llamaba "Opera novi nuntatio", y nunca fué considerada como una acción, sino como una defensa, cuyo efecto se limitaba a constituir en falta al dueño de las obras, en el caso de que no las suspendiera; además, no era necesario probar que se tenía derecho para intimar la prohibición, pues la prueba era materia de un debate posterior, y las obras debían suspenderse necesariamente, aún antes de que aquella se rindiera, y si se continuaban las obras a pesar de la prohibición, el demandante podía obtener permiso para destruir lo construido después de formulada ésta; con tal objeto se hacía constar el estado y las dimensiones de las obras edificadas en el momento de la notificación y se concedía a aquél un interdicto cuya fórmula establece la Ley Segunda, Libro XXXVIII, Título I del Digesto, que es restitutoria. Los autores que según los preceptos del Derecho Romano, han discutido acerca de la naturaleza del interdicto de obra nueva, han deducido en consecuencia, que no pertenece a la clase de los posesorios ni se funda en el derecho de posesión, entre otras razones, porque el que obtiene el interdicto no se hace mantener en una posesión jurídica, no estrechaba a su contrario a hacer las veces de actor, o a probar en el juicio posterior que tenía derecho de construir, por el contrario, la demanda imponía la obligación de probar al petionario que tenía derecho para impedir las obras emprendidas conservando -



- 8 -

su carácter de actor. Por este motivo sostiene Hau-
huille, (Revere de Legislación. Tomo V, Página 443.)
que la diferencia entre la denuncia de obra nueva --
y los interdictos posesorios está profundamente mar-
cada y sus efectos son profundamente inversos, por--
que en los posesorios se tiene por objeto asegurar --
la posesión en el juicio de propiedad, y la denun-
cia de obra nueva importa implícitamente el abandono
al demandado de esta ventaja. Así pues, la denuncia
de obra nueva no era en el Derecho Romano otra cosa --
que un medio provisorio y preliminar para proteger --
un pretendido derecho, mientras se obtenía un reco-
nocimiento y sanción mediante una sentencia; por --
eso convienen los autores que la denuncia de obra --
nueva no era, según el Derecho Romano, un interdicto
posesorio, ni siquiera una acción, sino una oposi-
ción provisoria, que debía justificarse después en --
el juicio respectivo. Antes se dijo que la denuncia
de obra nueva adquirió los caracteres de una acción
posesoria por un error que se remonta a la época --
de los glosadores del Derecho Romano, que estable-
cieron una doctrina enteramente falsa sobre la dis-
tinción de las tres especies de denuncia de obra nue-
va: la que se hacía por una simple oposición, verbal;
la que se hacía por una formalidad solemne, que consis-
tía en lanzar una piedra a la obra en construcción al
arrancarla de ésta; y por último, la que se hacía por
la autoridad del Magistrado; cuando en realidad no --
había más que una especie de denuncia, la primera de
las tres referidas, pues la segunda consistía solamen-
te en un hecho capaz de poner al constructor en esta-

3

-do de ser perseguido por el interdicto "quoad vi ---
aut clam", cuyo objeto era la destrucción de las obras
ejecutadas por violencia y clandestinamente; y la ---
última que tenía lugar en el caso de una perturbación
en la posesión a consecuencia de las obras comenza---
das en el fundo de otro; en virtud del error de los
glosadores, se aplicaron à la denuncia por el Magis-
trado las reglas de interdictos posesorios, y se es-
tableció así una institución desconocida en el Dere-
cho Romano, una institución especie de acción pose-
soria que producía el efecto de otorgar al denuncia-
te las ventajas de la posesión. Posteriormente se -
consideró también por los glosadores la denuncia
bal como una vía posesoria. La legislación de la
partidas aceptó la distinción establecida por los
sadores del Derecho Romano sobre las tres especies
de denuncia de obra nueva, (Ley Primera, Título 1.º,
Partida 3a.) y por lo mismo, quedó sancionado el
error de aquéllos que convirtió el interdicto en - -
una acción posesoria. La legislación Española san-
cionó la teoría que estima a la denuncia de obra nue-
va como una acción posesoria. Caravantes al comen-
tar la antigua Ley de Enjuiciamiento, dice refirién-
dose a la clasificación de los interdictos que hacía
el Derecho Romano: "Al interdicto de retener la po-
sesión se refería el de denuncia de obra nueva, y ---
era el que se intentaba contra aquel que ejecutaba -
en su propio terreno una obra o trabajos de que re-
sultaba o podía resultar un perjuicio al reclamante
y que, por consiguiente, le turbaba en la posesión -






de que gozaba y lo mismo la denuncia de obra vieja". Esta última teoría está sancionada por la legislación francesa de mil ochocientos treinta y ocho, que considera la denuncia de obra nueva como una acción posesoria, semejante al interdicto de retener la posesión, sujeta a las reglas que rigen a éste, y que, como los demás interdictos, puede intentarse dentro de un año contado desde la conclusión de la obra perjudicial. Grenieu dice: "La denuncia de obra nueva es según nosotros un verdadero interdicto de retener (complainte), en cuanto a sus reglas, y en cuanto a sus condiciones de admisibilidad. Este es un principio que resulta evidentemente de la Ley de mil ochocientos treinta y ocho, artículo 60. y el Código de Procedimientos, artículo 23, solamente se diferencia un tanto de esta acción por la naturaleza de la perturbación posesoria, en que en el caso del interdicto de retener la perturbación material no resultaría más que de un hecho cometido sobre el fundo del poseedor; y en caso de denuncia de obra nueva consistiría más especialmente en una obra, en una construcción sobre la heredad del demandado". (Actions Possessoires. Páginas 266 y 267.) Esta teoría es la de la mayoría de los autores modernos, que sostienen que el interdicto de obra nueva es el de amparo de la posesión del cual difiere solamente por la naturaleza del acto que constituye el ataque a la posesión; pues en este último puede verificarse en fundo del poseedor, mientras que en el primero la perturbación de la posesión consiste en una obra nueva que puede construirse en el fundo del dueño de --

5

ella, pero siempre se funda en el hecho de la posesión. En efecto, si la obra nueva importa un atentado a la posesión de una servidumbre sobre el fundo en el cual se construye, es claro que procede el interdicto en defensa del derecho real que vulnera; -- y ataca una servidumbre de aquellas que en el tecnicismo de la ciencia se conocen con el nombre de servidumbres legales, procede también el interdicto de obra nueva, porque hay una perturbación indirecta a la posesión del fundo, pues impide el ejercicio del derecho inherente al que la ley estima como accesorio. Manresa expresa, que los interdictos son juicios sumarísimos, que tienen por objeto decidir inmediatamente sobre la actual y momentánea posesión, sea sobre el hecho de la posesión, sin perjuicio del derecho de los interesados, y también suspender o evitar un hecho que nos perjudica o puede causar daño; que las sentencias que en estos juicios se pronuncian, aunque definitivas, tienen un carácter especial, porque si bien condenan o absuelven de la demanda intentada, y no puede por lo tanto reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no impiden que se vuelva a tratar del mismo negocio en más amplio juicio, con más solemnes formas, con declaraciones -- que lleven, no al carácter interino y provisional del interdicto, sino al de estabilidad, permanencia, y perpetuidad en los derechos que en el juicio se ventilan; son pues, juicios sumarísimos y preliminares de otros, en los que con más prendas de acierto se aleguen, examinen, discutan y decidan las cuestiones






- 10 -

120

que el interdicto ha fijado sólo de un modo transitorio; que el interdicto de obra nueva procede siempre que se haga una obra nueva con la cual se perjudiquen los derechos de un tercero. Chiovenda al tratar del interdicto de obra nueva, expresa que con la denuncia de obra nueva se pretende detener el desenvolvimiento de una determinada actividad, que hay razón para temer como dañosa para la cosa poseída por nosotros, y garantizar el ejercicio de las acciones -- que derivan del hecho dañoso cuando la actividad continúa, y tiene por condiciones: I. la posesión de un inmueble, de un derecho real u otro objeto; II. una obra nueva iniciada por otro en terreno propio o ajeno, desde hace menos de un año y aún no terminada; -- III. el temor del daño que de ésta pueda derivar a la cosa poseída. Estima así mismo, que la acción de interdicto de obra nueva no es más que una medida -- provisional o de conservación; que el Juez examinará las diversas circunstancias y condiciones del caso -- con conocimiento sumario, y tomará las resoluciones definitivas y urgentes, que pueden ser, la suspensión de la obra y eventualmente su reducción al estado primitivo, o su continuación; y que en juicio ulterior, con conocimiento completo, se procede a la decisión definitiva examinando si la oposición a la continuación de la obra, es fundada, lo que puede suponer, según los casos, un juicio a fondo o sobre la posesión o sobre la propiedad o sobre la existencia del derecho real; y clasifica esta acción dentro de las medidas provisionales o de conservación; lo que es lógico y natural, en atención a la característica

provisional de todos los interdictos que no deciden_
cuestiones de propiedad ni posesión definitivas. --
El Código de Procedimientos Civiles de mil ochocien-
tos setenta y dos adoptó y sancionó este sistema, --
que reprodujeron los Códigos de mil ochocientos ---
ochenta, y mil ochocientos ochenta y cuatro, y más -
ampliamente el vigente Código Procesal para el Dis-
trito y Territorios Federales. El de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro que es el que rige en la espe-
cie, después de definir los interdictos, entre los -
cuales enumera el de obra nueva, dispone en su artí-
culo 1132 que sólo proceden respecto de los bienes -
raíces y de los derechos reales constituidos sobre
ellos; en el artículo 1138 ordena que ningún interdic-
to admita prueba sobre la propiedad, sino sólo
las que versen sobre el hecho de la posesión; y en -
su artículo 1140 dispone que no procede el interdic-
to de obra nueva pasado un año después de la termina-
ción de la obra cuya destrucción se intenta, y que que-
da a salvo el derecho del interesado, para pedir en_
tal caso la demolición de la obra en juicio ordina-
rio, sin duda porque en este plazo se pierde el dere-
cho de posesión conforme al artículo 856 del Código_
Civil; y por último, el artículo 1141 dispone que --
no puede usar del interdicto de obra nueva el que --
posee la cosa con título precario, disposición que -
tiene su razón de ser, si se relaciona con lo que --
dispone el artículo 1142 del mismo Código Procesal, -
porque el que posee en nombre de otro no es poseedor
en derecho según el artículo 826 del Código Civil. -



121



De lo expuesto resulta que la legislación de mil - - ochocientos ochenta y cuatro, que es la aplicable en la especie, adoptó el sistema según el cual la denuncia de obra nueva es una acción posesoria, porque -- tiene por objeto defender la posesión de un derecho real, una servidumbre constituida en nuestro favor -- por la ley, por contrato o por última voluntad, sistema que está de acuerdo con la teoría moderna sobre el interdicto de obra nueva; y así el artículo 1195, -- en su fracción I, del Código de Procedimientos Civiles emplea el término "perjuicio en sus propiedades", término que al parecer ha llevado a la autoridad responsable a exigir en la sentencia que motiva el presente juicio de garantías que se acredite la propiedad del inmueble afectado para que pueda prosperar la acción intentada, es pertinente considerar al particular que dicho término tiene su razón de -- ser en la disposición contenida por el artículo 1141 del Código Procesal ya citado que no concede el interdicto de obra nueva al que posee con título precario; en estas condiciones, si se tiene en consideración que según los artículos 825, 826 y 828 del Código Civil, el poseedor tiene a su favor la presunción de poseer por sí mismo; que el que posee en nombre de otro no es poseedor en derecho; y que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales; y concordando -- la doctrina con estas disposiciones legales, se -- concluye que la propiedad a que se refiere el artículo 1195 es la que se deriva presuncionalmente de la

SE
S

posesión, pues sólo el que posee a nombre propio, es poseedor en derecho, y sólo él puede ejercer la acción de interdicto de obra nueva. Atento lo anterior, y teniendo además en cuenta, la naturaleza sumarísima y provisional de los interdictos, y las disposiciones contenidas en los artículos 1134 y 1138 del Código de Procedimientos Civiles, que respectivamente establecen que los interdictos no preocupan las cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, y que en ningún interdicto se admitirán pruebas sobre la propiedad, sino sólo las que versan sobre el hecho de la posesión, es evidente que la exigencia de la sentencia reclamada al pretender que se justifique de manera plena la propiedad del terreno afectado por la obra nueva, es inconstitucional, porque no se funda en ley, y desvirtúa la recta y lógica interpretación jurídica de las disposiciones legales citadas. Siendo pues patente la procedencia del concepto de violación que se examina, debe concederse a la sucesión quejosa la protección federal para el efecto de que al dictarse nueva sentencia la autoridad designada como responsable examine si con las pruebas rendidas quedó justificada la posesión jurídica del inmueble afectado.

SEXTO:— En vista de lo antes considerado, resulta innecesario el estudio relativo al concepto de violación que se refiere a la inaplicación del artículo 828 del Código Civil, que la sucesión quejosa estima infringido porque con las informaciones testimoniales aportadas se acreditó plenamente la posesión de los terrenos cuestionados; pues

122



no habiéndose juzgado la acción bajo este aspecto, --
 sino siendo precisamente los efectos de esta ejecutivo-
 ria los de que la autoridad designada como responsa-
 ble dicte nueva resolución examinando las pruebas --
 aportadas para el efecto de que determine si quedó --
 o no acreditada la posesión jurídica del inmueble --
 afectado, es claro que al producir nueva sentencia, --
 podrá o no, según proceda, aplicar las disposiciones
 que correspondan. Por último no es fundado el sépti-
 mo concepto de violación que se contrae a la infrac-
 ción de los artículos 551 y 554 del Código de Proce-
 dimientos Civiles, porque la sentencia sí concede --
 pleno valor probatorio tanto a los testimonios de --
 escritura pública exhibidos por la parte actora, como
 a las actuaciones judiciales en lo que se refiere a
 la inspección judicial practicada, pues en relación --
 a esta última estima acreditada plenamente que existe
 la obra en construcción precisamente en el terreno --
 que se refiere la parte actora en su demanda ini-
 cial, y en cuanto a los testimonios de escritura pú-
 blica que exhibió la misma parte, también les conce-
 de fé plena, en el concepto de que la consideración
 relativa a que tales documentos no identifican el --
 terreno a que se refiere el actor, está ajustada a --
 las constancias de los mismos, puesto que en uno de
 dichos documentos no se delimita la extensión del --
 terreno cuya propiedad ampara, y en el otro, las --
 colindancias no coinciden con las que precisa el ac-
 tor en su demanda, ni con las que los testigos apor-
 tan en sus declaraciones.

Por lo expuesto, y con fundamento

Cotejado con el
proyecto aproba-
do por el C. Mi-
nistro Abenamar
Eboli Paniagua.

en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones II y VIII, de la Constitución General de la República, se resuelve:

PRIMERO:- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a la sucesión del General Rómulo Cuéllar, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, consistentes, en la sentencia definitiva, pronunciada en grado de apelación, el dieciocho de octubre de mil novecientos treinta y cinco, en el interdicto de obra nueva que promovió la precitada sucesión contra los señores Santiago y Marcial Luna.

SEGUNDO:- Notifíquese; comuníquese; y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Alfonso Pérez, Abenamar Eboli Paniagua, Luis Bazdresch y Accidental Francisco H. Ruiz, lo resolvió la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor Presidente Sabino M. Olea no asistió a la discusión y votación de este asunto, por las razones que constan en el acta del día.

Firman los CC. Presidente y Ministros que integraron la Sala con el Secretario que autoriza y da fé.

PRESIDENTE ACCIDENTAL:

Francisco H. Ruiz.



- 13 -

Exp. 6652/35/2a.

123

- MINISTROS:

Alfonso Pérez Gasga.
Abenamar Eboli Paniagua.
Luis Bazdrasch.

EL SECRETARIO:

Arturo Puente y F.